



**AUTO INTERLOCUTORIO**

<b>PROCESO</b>	Ordinario
<b>DEMANDANTE</b>	Nicolás Alberto de Jesús Henao Henao
<b>DEMANDADOS</b>	Colpensiones Porvenir S.A.
<b>RADICADO</b>	05-001-31-05-018-2018-00141-02
<b>TEMA</b>	Costas procesales. Agencias en derecho
<b>DECISIÓN</b>	Modifica el auto recurrido

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 087** de discusión de proyectos, dentro del proceso ordinario promovido por **NICOLÁS ALBERTO DE JESÚS HENAO HENAO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-** y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PORVENIR S.A.**, con radicado 05-001-31-05-014-2011-01272-02, procede a resolver la apelación contra auto interlocutorio.

• **AUTO RECURRIDO:**

Por auto del 12 de febrero de 2023, el Juzgado Decimoctavo Laboral del Circuito de Medellín liquidó las costas procesales de manera concentrada por un valor total de **\$1.277.816**, a cargo de Porvenir S.A. y en favor de la parte actora.

• **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por la parte actora, quien a través de su mandataria judicial la sustentó en los siguientes términos: que no está conforme con el valor liquidado por el juzgado, pues este no tuvo en cuenta el límite máximo de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes de que trata el acuerdo PSAA16-10554 de 2016 para los procesos declarativos en general. Solicita como consecuencia, se reajuste la liquidación en una suma mayor.

- **ALEGATOS:**

**Porvenir S.A.:** *“Se debe confirmar el Auto de liquidación de costas procesales del día 12 de febrero de 2021, lo anterior porque si bien la apoderada de la demandante indica que las agencias en derecho debían ser liquidadas con una suma dineraria mayor, lo cierto es que debe tenerse en cuenta que en atención al acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, especialmente el artículo segundo y quinto de dicho acuerdo, que establece como criterios para la fijación de las agencias en derecho y costas procesales, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión (...) Adicionalmente, debemos indicar que mi representada siempre obró con buena fe objetiva, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época en la que se dio el traslado de la parte demandante del RPM al RAIS y buscando siempre el beneficio de la parte demandante, por lo que la condena en costas liquidada por el Despacho es completamente congruente con esto. Además, la práctica de pruebas que se surtieron en el proceso no fue de mucha exigencia en cuanto tiempo y técnica para el juzgado y las partes, es por ello que no le asiste razón a la parte demandante”*

### **CONSIDERACIONES:**

Para resolver la inconformidad presentada, lo primero que debe señalarse es que las **expensas judiciales** – entendidas estas como los gastos necesarios para el trámite del juicio - (honorarios de peritos, copias, diligencias que deban llevarse a cabo por fuera del Despacho Judicial) y las **agencias en derecho** – dinero que se adeuda por los gastos en que incurrió la parte triunfante de un proceso con la contratación del profesional que defendió sus intereses – (honorarios), hacen parte integrante de las **costas procesales**, lo cual constituyen en erogaciones que debe cubrir la parte vencida en el proceso.

Igualmente, las agencias en derecho *“representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses”* y es *“el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios*

*establecidos en el artículo 393 – 3 – del Código de Procedimiento Civil... Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado...”*<sup>1</sup> (Negrilla de la Sala).

Por su parte, el artículo 366 -4- del Código General del Proceso, indica que para la fijación de las agencias en derecho se consultarán las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Determina, igualmente, que si “...éstas solamente establecen un mínimo, o éste o un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de esas tarifas...”

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, no hay duda alguna que el caso de autos debe resolverse bajo los parámetros del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, el cual en artículo 5°, numeral 1°, consagra de la liquidación en los procesos declarativos en general, lo siguiente:

*“... En primera instancia.*

*a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:*

- (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.*
- (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.*

*b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V...”* (Negrilla de la Sala)

Ahora, respecto de las agencias en derecho liquidadas por la juez, debe señalarse que es perfectamente viable tasarlas conforme a las pautas que trae la “*tarifa de honorarios del Consejo Superior de la Judicatura*”, sin desconocerse que la normatividad aludida establece criterios de carácter **cualitativo** y **cuantitativo** para que el juzgador fije las agencias en derecho, mas no se deduce de la interpretación de tales disposiciones que estas, de manera automática, impongan el valor de dicha erogación, pues simplemente orientan al juez para que en uso de su discrecionalidad fije un monto que considere prudente y proporcional con el valor de las condenas por él reconocidas, el tipo de proceso, la duración y calidad de la gestión que realizó el apoderado en el transcurso del proceso, teniendo como límite el tope máximo fijado por la ley, pero sin que ello signifique que de manera necesaria, el fallador esté

---

<sup>1</sup> Sentencia de la Corte Constitucional C–539 del 28 de julio de 1999

condicionado a fijar como agencias el máximo legal como lo pretende el recurrente.

Descendiendo al **presente caso**, es importante tener claro que se trató de un proceso ordinario laboral de ineficacia de traslado, en donde la jurisprudencia de nuestro órgano de cierre ha marcado un lineamiento importante y claro, y en donde se imponen obligaciones no periódicas y de hacer.

En anteriores oportunidades, esta Sala del Tribunal había considerado que, en esta clase de asuntos, esto es, con relación a la fijación de las agencias en derecho de la primera instancia de aquellos procesos ordinarios que buscan la ineficacia del traslado de fondo de pensiones, la decisión del juzgado debía mantenerse, siempre y cuando se ajustara a los límites establecidos en el literal b del artículo 5º del Acuerdo PSAA16-10554; sin embargo, tal posición merece ser reevaluada, por los siguientes argumentos.

No desconoce la Sala que la apoderada de la parte demandante adelantó todas las gestiones necesarias para el reconocimiento de las pretensiones, las cuales se circunscribieron a la presentación de la demanda el 12 de marzo de 2018 (como se comprueba con el sello de recibido de la demanda digitalizada) y al recaudo de la prueba documental, igualmente no sobra indicar que el presente asunto en primera instancia hasta el momento de liquidarse las agencias en derecho, tuvo una duración de 2 años y 9 meses, siendo favorable para los intereses de la parte actora, por lo que, teniendo en cuenta *“la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por la apoderada y las demás circunstancias relevantes...”*, considera la Sala que deben ser **MODIFICADAS** las agencias en derecho en primera instancia en la suma de \$2.320.000. Valor que además se encuentra dentro de los extremos determinados por el literal b del art. 5º del Acuerdo No. PSAA16-10554.

Con los argumentos anteriores se hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por Porvenir S.A.

En esta instancia no se impondrán costas procesales.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**,

**RESUELVE:**

Se **MODIFICA** el auto recurrido por vía de apelación, en el sentido de imponer la liquidación de las costas procesales, en lo relacionado a las agencias en derecho de primera instancia en la suma de **\$2.320.000**, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

Sin costas procesales en el recurso.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° 082 del 16 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>